

Nicaragua:

El pomposo entierro de la Revolución Sandinista

El 19 de julio de 1979, el pueblo de Nicaragua triunfó sobre la dictadura del clan Somoza, dando inicio a la Revolución Sandinista, que duraría casi 11 años. En el 46 aniversario de esta revolución, incluso los últimos vestigios que quedaban de la misma fueron pisoteados y enterrados en una ceremonia tan bizarra como pomposa.

Herméticamente cerrada a la población común, la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo desfilar, el 19 de julio de 2025, a más de 36.000 estudiantes y 4.000 uniformados de la policía y el ejército. Tuvieron que aparecer en la Plaza de la Fe, organizados en bloques estrictamente ordenados de 150 personas cada uno (véase foto), para celebrar a los dictadores como los gobernantes absolutos de Nicaragua.

El desarrollo de este [acto de cuatro horas](#) estuvo completamente orientado a que Rosario Murillo apareciera como copresidenta con absoluta igualdad de rango al lado de Daniel Ortega. Sin embargo, los cánticos de “Daniel-Daniel-Daniel” dejaron claro quién sigue siendo el verdadero gobernante del país. Ortega inició su discurso con las palabras: “Aquí todos somos Daniel”. El comandante, que nunca participó en la lucha armada de liberación y que en 1979 era completamente desconocido en Nicaragua, se equipara aquí con el FSLN, con la Revolución Sandinista y con todo el pueblo nicaragüense. Esto constituye, sin embargo, únicamente una manifestación más de su megalomanía y de su convicción de estar cumpliendo una misión divina en Nicaragua.

Represión y purgas políticas

Su mensaje principal consistió en la amenaza abierta contra cualquier expresión crítica u opositora: “Para que tengamos paz, tenemos que tener fortaleza y espíritu de combate. ¡Si queremos defender la paz, tenemos que estar siempre preparados para la guerra contra los conspiradores!” Llamó a las estructuras paramilitares de los barrios, leales a él, a mantener la “vigilancia revolucionaria” frente a todos los “terroristas, conspiradores y vendepatrias, porque sabrán que cuando se les descubre, se les captura y se les procesa.”

Que estas no son palabras vacías lo demuestra el desarrollo de la represión estatal en los últimos meses y años. El año 2025 se caracterizó por el hecho de que las medidas de persecución política se dirigieron cada vez más también contra funcionarios de nivel medio y alto del régimen. Ante los persistentes rumores sobre la supuesta mala salud de Ortega, actualmente se observa una auténtica ola de purgas, que comenzó hace más de un año y que ahora afecta incluso a las personas de máxima confianza de la pareja presidencial.

Por ejemplo, Bayardo Arce, uno de los nueve *Comandantes de la Revolución* que lideraron la Revolución Sandinista y el último de este grupo que había permanecido aliado de Ortega, fue

puesto bajo arresto domiciliario el 26 de julio de 2025 bajo acusaciones de corrupción. Fue sin duda uno de los mayores beneficiarios de la apropiación privada de bienes públicos por altos cuadros del FSLN desde hace décadas. De esta manera adquirió varias empresas, especialmente en la comercialización del arroz, uno de los alimentos básicos de Nicaragua. Pero, a pesar de la corrupción endémica del país no se convirtió en un capitalista exitoso y sus acciones resultaron en deudas fiscales millonarias que finalmente condujeron a la expropiación de sus negocios.

El 14 de agosto, el agente de seguridad Néstor Moncada Lau sufrió un destino similar. Estuvo implicado en diversos atentados terroristas, organizó la represión militar de protestas pacíficas, figuraba en los registros como padre de al menos uno de los hijos extramatrimoniales de Daniel Ortega, fue durante años jefe de seguridad del secretariado del FSLN y, como uno de los allegados más cercanos a Ortega, también conocía en detalle todos los escándalos dentro de la casa presidencial.

Unas semanas antes, el 19 de junio de 2025, el destacado crítico del régimen, Roberto Samcam, fue asesinado por sicarios en su exilio en Costa Rica. Samcam, mayor retirado, conocía profundamente los procesos internos del ejército nicaragüense y analizó en numerosos artículos y libros la dinámica interna del aparato represivo orteguista, incluyendo la participación del ejército en la represión estatal.

Estas son solo tres muestras de una ola de persecución que no deja a nadie a salvo y que ya ha afectado a varios miles de personas, desde ciudadanos comunes hasta altos funcionarios.

Es evidente que el régimen busca asegurar que Rosario Murillo se instale como sucesora de Ortega de la forma más suave posible. Por esta razón, desde hace meses, figuras en puestos claves del régimen, de cuya lealtad incondicional a Murillo no podría estar completamente segura, han sido casi a diario destituidas de sus cargos y reemplazadas por otros títeres.

Como muchas de estas personas eran altos funcionarios del régimen, es muy probable que realmente se hayan enriquecido a gran escala. Sin embargo, la verdadera razón de su persecución no radica en sus negocios corruptos, procedimientos profundamente arraigados en todas las instituciones nicaragüenses, sino en el hecho de que Ortega-Murillo tienen dudas sobre su obediencia ciega.

Las circunstancias de la muerte de Humberto Ortega, hermano de Daniel, subrayan la importancia que tiene la sucesión familiar para el régimen. Humberto también fue uno de los nueve *Comandantes* de la dirección nacional del FSLN, estrategia de la lucha insurreccional victoriosa y jefe del ejército sandinista, manteniéndose hasta su muerte como figura influyente en la política nicaragüense. El 19 de mayo de 2024, la plataforma argentina [infobae](#) publicó una entrevista en la cual el exgeneral cuestionaba las capacidades de liderazgo de Rosario Murillo y defendía la necesidad de llegar a un compromiso con la oposición. Como respuesta, dentro de pocas horas, su casa fue rodeada por la policía, se le retiraron todos los medios de comunicación, quedó en aislamiento total y se le negó la atención médica que necesitaba por causa de varios problemas de salud. Una semana después, Ortega lo condenó públicamente como “traidor”. El 9 de junio, Humberto envió una última urgente solicitud de auxilio desde un celular secreto a la redacción del periódico electrónico *Confidencial*. Fue ingresado en el hospital militar el 11 de junio, pero bajo estas condiciones su salud se deterioró, hasta que falleció el 30 de septiembre de 2024.

Las protestas del abril de 2018

Las actuales olas de represión y de purgas institucionales tienen su origen en las protestas multitudinarias del abril de 2018, en las que la población se manifestó pacíficamente contra la opresión política y el enriquecimiento desmedido de la familia Ortega-Murillo. Cuando la policía y los paramilitares leales a Ortega reprimieron a los manifestantes con creciente violencia, se erigieron barricadas en los barrios residenciales para impedir el ingreso de las fuerzas represivas.

El régimen respondió con extrema brutalidad. Más de 2.000 personas fueron encarceladas en los meses siguientes y más de 300 asesinadas, algunas por francotiradores del ejército. El Estado autoritario, que hasta entonces había permitido cierto grado de libertad de información, enseñanza, religión y debate político, se transformó en una dictadura abierta que suprimió toda actividad independiente y no controlada por el Estado.

A partir de ese momento, se tomaron innumerables medidas para silenciar al pueblo de una vez por todas. Se aprobaron una serie de leyes para dar una apariencia legal a las medidas represivas del gobierno. Se prohibieron manifestaciones, incluso si consistían solamente en ondear la bandera nacional azul y blanca. Gradualmente, todos los partidos que no se sometieron a la dictadura fueron ilegalizados. Las elecciones de 2021, boicoteadas por aproximadamente el 80% de la población, fueron un fraude completo. Desde entonces, el nuevo parlamento ha aprobado casi todas las resoluciones por unanimidad, sin votos en contra.

Los dos representantes más conocidos del grupo étnico miskitu, Steadman Fagoth Müller y Brooklyn Rivera, fueron detenidos y permanecen “desaparecidos” desde hace dos años. Más de 4.000 organizaciones no gubernamentales –incluyendo universidades, iglesias, asociaciones profesionales, la Cruz Roja, asociaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos– fueron prohibidas y sus bienes confiscados. En 2023, 222 presos políticos fueron deportados a los Estados Unidos, y más de 300 personas fueron despojadas de su ciudadanía nicaragüense, sus títulos profesionales, bienes y pensiones.

Toda la élite política y cultural del país se encuentra ahora en el exilio. Vilma Núñez, de 86 años y presidenta del CENIDH, es la única persona de este grupo que aún se niega a abandonar Nicaragua. Debido a su edad avanzada y notoriedad internacional, el régimen parece no atreverse a tocarla. Vive actualmente en aislamiento casi completo y sin cualquier estatus legal.

La crisis del sistema

El 18 de febrero de 2025 se promulgó, a través de un procedimiento inconstitucional, una nueva constitución. Esta modifica por completo la estructura del Estado, elimina la separación de los poderes de Estado y subordina estas instancias –ya no denominadas “poderes”, sino “órganos”– a la presidencia. Además, reemplaza las funciones de presidente y vicepresidente por la figura de dos copresidentes, un hombre y una mujer, concentrando así el poder absoluto en las manos de Ortega y Murillo. La constitución creada por la Revolución Sandinista, que garantizaba derechos fundamentales, división de poderes y pluralismo político, ha sido destruida hasta sus cimientos.

Durante los primeros seis años de la revolución, Ortega coordinó la Junta de Gobierno Revolucionaria, para luego ser el presidente democráticamente elegido del país, ejecutando

estas funciones bajo la supervisión parlamentaria y de la dirección del FSLN. Por el contrario, Ortega y Murillo gobiernan hoy en día de manera dictatorial y sin legitimidad democrática alguna. Han abolido incluso los restos de la constitución republicana creada por la Revolución Sandinista.

Nicaragua se encuentra económica, política y socialmente por los suelos. El capitalismo de amiguetes ha destruido la economía. Las principales fuentes de ingresos son ahora la exportación de oro, extraído de manera ambientalmente destructiva y por transnacionales privadas, y las remesas de familiares emigrados, principalmente de los Estados Unidos. La desconfianza y el miedo dominan actualmente el estado de ánimo de la gente en el país. La sociedad está corroída por continuas oleadas de represión y purgas políticas. La oposición organizada, ubicada completamente fuera del país, es débil y fragmentada, y no podrá derrocar la dictadura. Sin embargo, las contradicciones internas del régimen generan medidas gubernamentales cada vez más absurdas, que inevitablemente conducirán a conflictos internos y fracturas. Muchos consideran la implosión del sistema como la opción más probable para su colapso, y una creciente parte de la población espera que eso ocurra pronto.

Lisboa, 7 de octubre de 2025

Manifestación del 19 de julio de 2025 con motivo del 46 aniversario de la Revolución Sandinista

